



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

Convocante: Pedro Alirio Vargas Bello
Convocado: Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá – ITBOY
Radicación: 15001 3333 004 **2018 00222 00**
Asunto: Conciliación Prejudicial

I. ASUNTO

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes el día 29 de octubre de 2018, ante la Procuraduría 121 Judicial II para Asuntos Administrativos de Tunja.

II. ANTECEDENTES

A través de apoderada judicial, el señor Pedro Alirio Vargas Bello presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial Delegada para Asuntos Administrativos de Tunja (Reparto), con el objeto de que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. RS2675877 de 17 de abril de 2017, mediante el cual fue declarado contraventor de las normas de tránsito al convocante.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que la multa y la restricción de los derechos de conducción impuestas en su contra, sean retiradas del Sistema Integrado de Multas y Sanciones “SIMIT”. Además, solicitó el reconocimiento y pago de los daños causados por valor de \$1.500.000 millones de pesos (*sic*).

Como fundamento de lo expuesto, la parte convocante señaló que fueron practicadas “*unas pruebas de embriaguez que carecen de valides (sic) jurídica*”, al considerar que no se practicó la segunda prueba dentro de un lapso no mayor a 10 minutos ni menor a 2 minutos, y que las boquillas utilizadas fueron contaminadas por la autoridad de tránsito, porque aquella posó su boca directamente en las mismas, de manera previa a la prueba del posible infractor.

Por último, indicó que no se aportaron todas las pruebas recaudadas al trámite administrativo, pese a que la prueba fue realizada más de dos veces.

III. TRÁMITE PROCESAL

La solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 24 de agosto de 2018 (fls.51 a 57); remitida por la Procuraduría 178 Judicial para Asuntos Administrativos de Duitama y asignada por reparto a la Procuraduría 121 Judicial II para Asuntos Administrativos de Tunja, quien la admitió mediante Auto No. 196 de 28 de agosto de 2018 (fl. 53), al estimar que se encontraban reunidos los requisitos previstos en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia

con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 de 2015¹, y la respectiva audiencia de conciliación se celebró el día 29 de octubre de 2018 (fl. 59).

IV. ACUERDO CONCILIATORIO

La fórmula propuesta por la entidad convocada, se contrae a los siguientes términos:

*“...en primer lugar en lo eferente a las pretensiones económicas decide no conciliar dichas pretensiones por la ausencia de pruebas que así lo justifiquen y en segundo lugar, nuestra propuesta conciliatoria para que sea puesta en conocimiento del Juez Administrativo proponemos la **Revocatoria de los actos administrativos**, en cuanto a que las posibles irregularidades encontradas al interior del estudio, alusivas a la ausencia y valoración de pruebas, vulneración del debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia presentadas dentro del proceso contravencional por infracción a las normas de tránsitos son contrarias al sentir de la Ley y en especial a lo previsto en el Código Nacional Tránsito Ley 769 de 2002 y Ley 1696 de 2013, por otra parte, dentro de la propuesta de la entidad que represento, de ser aprobada la presente conciliación por el Juez Administrativo, **nos comprometemos, dentro de los 5 días siguientes a su aprobación a emitir los actos administrativos correspondientes y a ordenar en el mismo tiempo descargar del sistema la orden de comparendo, la multa al igual que el levantamiento de las alertas tanto en el RUNT como en el SIMIT que son las alusivas a la suspensión de la licencia de conducción del convocante y como prueba de nuestro cumplimiento a emitir paz y salvo correspondiente...**”*

A su turno, la parte convocante aceptó la propuesta presentada por el apoderado del Instituto de Transito y Transporte de Boyacá – ITBOY-; en este entendido, desistió de las pretensiones económicas y se comprometió a no iniciar ningún tipo de acción en contra del Instituto de Transito de Boyacá, con relación a los perjuicios causados por el mal proceder de la autoridad de tránsito, al momento de la realización del procedimiento por embriaguez.

Por último, el representante del Ministerio Publico señaló que, a su juicio, el acuerdo conciliatorio debía ser **aprobado parcialmente**, atendiendo a que si bien la revocatoria del acto administrativo se constituía en una prerrogativa de la Administración para enmendar sus actuaciones contrarias a la ley, también era cierto que esta tenía efectos a futuro, comoquiera que mientras el acto administrativo conservó su presunción de legalidad, produjo efectos en virtud de la ejecutividad y la ejecutoriedad (fs. 80-82).

V. CONSIDERACIONES

Tratándose de asuntos de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la ley prescribe que pueden conciliar, total o parcialmente en las etapas prejudicial o judicial, las personas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer esta

¹ “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.

jurisdicción a través de los medios de control de reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho y controversias contractuales².

El inciso final del art. 73 de la Ley 446 de 1998, que adicionó el art. 65 A de la Ley 23 de 1991, respecto a la aprobación de un acuerdo conciliatorio establece lo siguiente:

“La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público”.

De esta norma se desprende unos presupuestos para la aprobación o improbación del acuerdo conciliatorio, y serán examinados por el Despacho, en el siguiente orden:

1. Que no haya operado el fenómeno de la caducidad (art. 61 Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81 Ley 446 de 1998).
2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 Ley 23 de 1991 y 70 Ley 446 de 1998).
3. Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.
4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (art. 65 A Ley 23 de 1991 y art. 73 Ley 446 de 1998).

VI. DEL CASO CONCRETO

1. Que no haya operado el fenómeno de la caducidad

El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 señala:

“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”

² Tribunal Administrativo de Boyacá; MP. Clara Elisa Cifuentes Ortiz; 17 de mayo de 2017.

Ahora bien, debe considerarse que el día 2 de enero de 2017 se impuso orden de comparendo al señor Pedro Alirio Vargas Bello; este proceso sancionatorio de tránsito concluyó el 17 de mayo de 2017, declarándolo contraventor de las normas de tránsito por hallarse incurso en la conducta descrita en el artículo 5° de la Ley 1696 de 2013, y con la imposición de una multa de 360 s.m.m.l.v. y suspensión de la licencia de conducción por el término de cinco (5) años (fl. 43 a 50).

La anterior decisión que fue impugnada en la misma fecha, y el recurso de apelación fue resuelto el 26 de abril de 2018³, momento a partir del cual la parte convocante disponía de cuatro (4) meses que se extendían hasta el 26 de agosto de 2018 para presentar demanda; sin embargo, la apoderada de la parte convocante solicitó audiencia de conciliación el 24 de agosto de 2018, la cual fue celebrada el 29 de octubre de 2018 (fl. 51), sin que se configurara el fenómeno de la caducidad.

2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes

El Señor Pedro Alirio Vargas Bello convocó al Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá – ITBOY, para surtir una conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial Delegada para Asuntos Administrativos de Tunja (Reparto), con el objeto de que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. RS2675877 de 17 de abril de 2017, mediante el cual fue declarado contraventor de las normas de tránsito, y con el fin de que se retire del Sistema Integrado de Multas y Sanciones “SIMIT”, la multa impuesta y la restricción de los derechos de conducción. Solicitó, además, el reconocimiento y pago de los daños causados como consecuencia de las sanciones en su contra. Es decir, que se trata de un acto de carácter particular, que causa un agravio injustificado para el convocante⁴.

A su turno, la entidad convocada pretende que el convocante decline su pretensión de pago por los daños causados, y se comprometa a no iniciar ningún tipo de acción por estos hechos, como consecuencia del proceder operativo de un agente estatal.

De lo anterior, se colige que los derechos reclamados son de carácter económico y de contenido particular, disponibles por las partes.

3. Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.

El señor Pedro Alirio Vargas Bello se encuentran representado judicialmente, por la abogada Eliana Alexandra Pulido Delgado, según poder obrante a folio 6 del expediente, con facultad expresa para conciliar, a quien se le reconoció personería para actuar mediante auto No. 196 de 28 de agosto de 2018. (fl.53)

³ Se desprende de los hechos mencionados en el acta de conciliación – Gestión Jurídica (folio 5)

⁴ Artículo 93 Ley 1437 de 2011

público que les es inherente, la ley establece exigencias especiales que deben tomar en cuenta el juez a la hora de decidir sobre su aprobación.

Entre dichas exigencias, la Ley 446 de 1998, en el último inciso del art. 73, prescribe que el acuerdo conciliatorio debe estar fundado en “las pruebas necesarias” que permitan deducir una alta probabilidad de condena contra el Estado-en el evento de que el interesado decidiese ejercitar las acciones pertinentes-, de modo tal que lo acordado no resulte lesivo del patrimonio público o violatorio de la Ley (...)”⁵.

Así, entonces, acreditada la irregularidad en el procedimiento efectuado por el uniformado Hugo Alexander Rico Camacho, miembro de la Policía Nacional, y advertida por el Comité de Conciliación de la entidad, puede inferirse una alta probabilidad de condena de la entidad demandada y que un proceso judicial implicará gastos mayores con cargo al patrimonio de la entidad demandada.

- Del acuerdo logrado:

Los presupuestos indispensables para impartir la aprobación del acuerdo logrado se encuentran reunidos, empero, el Despacho adelantará una precisión con relación a los efectos de la revocatoria del acto administrativo en cuestión, al considerar que el Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia de 17 de mayo de 2016⁶, puntualizó lo siguiente:

“No obstante, fuerza decir que si bien es cierto, la revocatoria del acto administrativo se constituye como la prerrogativa que tiene la administración para enmendar sus actuaciones que son manifiestamente contrarias a la ley generan un agravio injustificado, no lo es menos que esta tiene efectos hacia futuro comoquiera que, mientras el acto administrativo conservaba la presunción de legalidad, produjo efectos en virtud a la ejecutividad y ejecutoriedad que lo caracterizan.”

“Entonces, aunque el convocante pretendió que se eliminara del sistema de información – SIMIT- el reporte de la infracción y la sanción impuesta ello resulta inmodificable y a pesar que el convocado ofreció la revocatoria del acto administrativo, ello no conlleva de forma automática que sus efectos desaparezcan, es decir, la infracción cometida no se elimina y la suspensión de la licencia, mientras el acto sancionatorio tuvo vigencia, permaneció en el ordenamiento jurídico.”

De acuerdo con lo anterior, como la revocatoria del acto administrativo tiene efectos *ex nunc*, las sanciones impuestas no desaparecerán de forma automática, sino a partir de que se efectúe dicha revocatoria, pues con la expedición del nuevo acto administrativo, se entenderá creada una nueva situación jurídica particular y concreta para el señor Pedro Alirio Vargas Bello, consistente en el levantamiento de la multa y de las alertas en el RUNT y en el SIMIT (relacionadas con la suspensión de la licencia), así como la rehabilitación de la licencia de conducción y la expedición del correspondiente paz y salvo.

⁵Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP Dr. Alirio Eduardo Hernández Enríquez, Expediente No. 85001233100020030009101, veintinueve (29) de enero del dos mil cuatro (2004).

⁶ Mp. Clara Elisa Cifuentes Ortiz, 17 de mayo de 2016, Radicado No. 15001233300020150055800.

La entidad demandada se encuentra debidamente representada a través del abogado Jairo Giovanni Cruz Rincón, según poder conferido por el gerente general (e) del Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá – ITBOY, quien fue delegado por el Comité de Conciliación con expresa facultad para conciliar, y a quien le fue reconocida personería para actuar en la diligencia de 29 de octubre de 2018. (fs. 76, 80).

En este orden, las partes se encuentran debidamente representadas y facultadas para participar en la audiencia de conciliación celebrada el 29 de octubre de 2018.

4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público

En el expediente obran los siguientes medios de prueba:

- Copia íntegra del proceso administrativo contravencional por comparendo bajo infracción F, adelantado en el Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá “ITBOY”. (7-50)
- Solicitud de conciliación previa convocante Pedro Alirio Vargas Bello (fl.1-5)
- Poder otorgado por el convocante (fl.6)

Con sustento en lo anterior, el Juzgado encuentra acreditados los hechos narrados en la solicitud de conciliación, en tanto permiten advertir que el día 2 de enero de 2017 se extendió una orden de comparendo al señor Pedro Alirio Vargas Bello identificado con cédula 9.520.852, y que el proceso sancionatorio de tránsito concluyó mediante Resolución No. RS2675877 de 17 de mayo de 2017, con imposición de la multa de ocho millones ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos cuatro pesos (\$8.852.604) y la suspensión de la licencia de conducción No. 9520852 por el término de 5 años (fs. 7-50).

Valga señalar, que ante la solicitud de audiencia de conciliación prejudicial convocada por el señor Pedro Alirio Vargas Bello, en sesión de 18 de octubre de 2018, los integrantes del Comité de Conciliación del Sistema de Gestión Integral “ITBOY” Jurídica recomendaron conciliar, al estimar que revisadas la actuaciones surtidas podía advertirse que el proceder del uniformado que impuso el comparendo presentaba serios vicios, y que en la actuación administrativa de primera y segunda instancia, podía evidenciarse la ausencia de valoración probatoria y de pronunciamiento respecto a cada uno de los planteamientos expuestos por la apoderada de la parte convocante, lo cual iba en contravía del derecho fundamental al debido proceso y derecho de defensa.

Con relación a la no afectación del patrimonio público, es importante anotar que el Consejo de Estado ha expresado lo siguiente:

“(…)

En tratándose de materias administrativas contenciosas para las cuales la ley autoriza el uso de este mecanismo, dado el compromiso del patrimonio

Valga señalar que la aprobación del acuerdo con sustento en esta precisión, no se traduce en injerencia del juez en la voluntad expresada por las partes, habida cuenta que la determinación de los efectos que producirá la revocatoria del acto por parte de la Administración, es propio del control de legalidad del acuerdo logrado.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja,

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado entre el señor Pedro Alirio Vargas Bello y el Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá – ITBOY, contenido en el acta de conciliación de 29 de octubre de 2018, ante la Procuraduría 121 Judicial II para Asuntos Administrativos de Tunja, en el entendido de que la revocatoria de la Resolución No. RS2675877 de 17 de abril de 2017, producirá efectos *ex nunc* o hacia futuro.

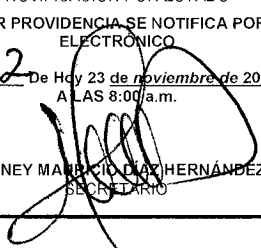
SEGUNDO.- En firme la presente providencia, expídanse copias auténticas de la misma y del acta de conciliación respectiva, con destino a las partes, de conformidad al artículo 114 del CGP, en los términos del Acuerdo PSAA16-100458 de 12 de febrero de 2016.

TERCERO.- Ejecutoriado el presente auto, archívese el expediente con las constancias y anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

⁶Mf.

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA NOTIFICACIÓN POR ESTADO LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO N° <u>62</u> De Hoy 23 de <u>noviembre de 2018</u> A LAS 8:00 a.m.  FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO

⁶ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 23 de noviembre de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario